

AGENDA CIUDADANA

Lorenzo Meyer

Trump es el corto plazo, no el largo

A Rubén Chuaqui, colega, maestro, erudito, le guardaremos siempre un lugar en el Colegio de México.

Es útil clasificar los liderazgos políticos según dos modelos ideales. Uno es el que busca generar apoyo resolviendo problemas, y el otro exacerbando problemas de manera selectiva. El actual presidente norteamericano, Donald Trump, encaja en el segundo y en nosotros, los mexicanos, encontró un campo propicio para desarrollarlo.

El 29 de marzo Trump lanzó un ultimátum: si México no impide el tránsito de las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, él resolverá el problema con el cierre total de sus pasos fronterizos con México, sin importar que eso afecte un comercio bilateral por 1, 700 millones dólares diarios, un cruce legal cotidiano de 400 mil vehículos y de un millón de personas, (cifras citadas por el propio Trump en conferencia de prensa del 31/08/16). Como consecuencia, en ambos países estarían en peligro tres millones de puestos de trabajo en las actividades que son el corazón integradas por el TLCAN-TMEC y a lo que debe añadirse su efecto en el comercio y servicios fronterizos que dependen de una clientela binacional. En suma: para poner fin a lo que califica de amenaza a la seguridad nacional de su país, el mandatario norteamericano propone un remedio que significaría un desastre económico espectacular para muchos en ambos países.

El objetivo real de esta política del presidente norteamericano es ganar la reelección de 2020 aprovechando el impulso que le dio la conclusión de la investigación del consejero especial Robert Mueller, y que sostiene que no hay evidencias para de una “colusión” en 2016 entre el equipo de campaña de Trump y el gobierno ruso para ayudarlo a ganar la elección. Sin el peso de esa sospecha sobre sus espaldas y para sorpresa de nadie, Trump de inmediato retomó uno de los temas

que le permitieron en el pasado crear y consolidar una gran base de votantes: el culpar a México de crear graves problemas a Estados Unidos y proponer su solución vía un castigo económico a un vecino relativamente débil.

En 2016 México fue acusado por el entonces candidato Trump de crearle un déficit comercial a Estados Unidos vía el TLCAN y de enviar sistemáticamente al norte drogas y “deshechos sociales” -violadores y asesinos- vía los indocumentados. La solución trumpista a ambos problemas fue amenazar con denunciar el tratado comercial entre ambos países y separarlos físicamente mediante un gran muro. Ahora, en el 2019, el problema revivido es mayor; pues se señala que México está dejando llegar a las puertas de Estados Unidos a millares de personas indeseables procedente de Centroamérica, El Caribe y África, que esa migración ha generado una crisis social que pone en peligro la seguridad norteamericana. Por eso, además de insistir en la construcción de “La Gran Muralla” fronteriza, Trump amenaza ahora con imponer aranceles y cerrar todos los pasos autorizados, sin importar sus efectos sobre la integración económica creada por el TLCAN a lo largo de más de tres décadas. Desde esta óptica, el “nacionalismo blanco” de Trump propone un “sacrificio patriótico” cuyo costo iría desde afectar cadenas productivas de gigantes como Ford o General Motors hasta el popular consumo de guacamole.

La II Guerra Mundial llevó a México a tener que aceptar ser aliado formal del difícil vecino del norte. En la Guerra Fría, (1947-1991), la alianza, en los hechos, se mantuvo: los gobiernos mexicanos controlaron a la izquierda local, fueron predecibles y aseguraron una estabilidad interna rara en América Latina. Para sostener la cooperación, Estados Unidos ignoró el autoritarismo mexicano, aceptó una independencia relativa de México y ayudó, aunque a un precio, a varios de sus gobiernos a salir de baches

Como consecuencia, en ambos países estarían en peligro tres millones de puestos de trabajo en las actividades que son el corazón integradas por el TLCAN-TMEC y a lo que debe añadirse su efecto en el comercio y servicios fronterizos que dependen de una clientela binacional. En suma: para poner fin a lo que califica de amenaza a la seguridad nacional de su país, el mandatario norteamericano propone un remedio que significaría un desastre económico espectacular para muchos en ambos países.

económicos, incluyendo la firma del TLCAN y el ingreso a la OCDE.

Cuando la Guerra Fría llegó a su fin, Washington fue abandonando el enfoque anterior. George W. Bush todavía alcanzó a asegurarle a Vicente Fox en 2001 que, para él, la relación con México era la más importante y en ese contexto el guanajuatense se dio el lujo de pedir “la enchillada completa”: una reforma migratoria inmediata que legalizara a los millones de indocumentados mexicanos. Sin embargo, unos días más tarde, el atentado de Al Qaeda del 11 de septiembre en Nueva York, cambió ese enfoque radicalmente y Barack Obama no puso ya mayor interés en la relación. En 2016 Trump recuperó el interés de Washington en México, pero en términos muy distintos.

En el discurso de Trump nunca ha aparecido ese otro factor que explicaría una buena parte la animadversión hacia México que ha logrado despertar en sus votantes: el racismo. Estados Unidos es un país formado por inmigrantes, pero toda la historia de ese fenómeno está permeada de discriminación. En el siglo XIX los irlandeses fueron muy mal vistos y ni qué decir de esos inmigrantes involuntarios, los africanos. A inicios del siglo XX las leyes anti chinas y anti japonesas dieron la nota. En los años treinta se expulsó a mexicanos por millares y sólo la necesidad de mano de obra provo-

cada por la II Guerra revirtió esa política, pero sólo temporalmente.

Trump truena hoy contra los centroamericanos, pero su discurso no hace referencia alguna a que las guerras civiles del siglo pasado en esa región y que desgarraron su tejido social, fueron bien alimentadas por el intervencionismo anticomunista norteamericano, y que buena parte de la violencia que hoy alienta la migración tiene mucho que ver con esas guerras.

En México, y a partir del acuerdo informal Calles-Morrow de 1927-1928, se reafirmó la política diseñada en Washington por el presidente Woodrow Wilson y que consistió en apoyar las bases de la estabilidad mexicana por así convenir al interés norteamericano de largo plazo. Hacer lo contrario -generar problemas políticos o económicos en México- a la larga desestabilizaría la frontera y resultaría contraproducente.

Todo indica que en política exterior, a Trump el largo plazo le tiene sin cuidado. Y es con base en ese supuesto que México tiene que diseñar su política exterior actual. Debe hacerlo sin chocar de frente con la gran potencia vecina, pero sin perder nunca la meta de largo plazo: defender el espacio de soberanía relativa ganada a lo largo de dos siglos.
www.lorenzomeyer.com.mx
agenda_ciudadana@hotmail.com

Antes de que cante un ganso

Luis Rubio

Al inicio de este siglo, Rusia se encontraba ante una encrucijada. El fin de la guerra fría había abierto ingentes oportunidades, pero su proceso de transición -de una economía controlada, centralizada y sin propiedad privada a una de mercado- había sido desastroso. En lugar de que se dispersara la propiedad entre millones de familias y potenciales empresarios, las enormes industrias soviéticas habían sido tomadas por un grupo de plutócratas que vendían los recursos públicos, comenzando por el petróleo, como si fuesen propios. Para 1998 las contradicciones del proceso de privatización y ajuste habían resultado incontenibles, provocando una de esas crisis financieras que los mexicanos habíamos conocido. La resaca llevó al poder a quien hasta la fecha sigue siendo el mandamás, Vladimir Putin, quien, con enorme habilidad, reconcentró el poder y sometió a los llamados oligarcas.

Armado de un nuevo plan y del control centralizado del poder, Putin reorganizó la economía y restableció la estabilidad económica, ganándose con ello el apoyo popular. Siguieron grandes cambios, ideas y proyectos para reactivar la economía y transformar la base productiva, intentando alejarla de su (casi) única fuente de riqueza, el petróleo.

Años después, quien fuera primer ministro, Viktor Chernomyrdin, evaluó lo logrado: “Esperábamos lo mejor pero las cosas resultaron como siempre”. ¿Acabará igual la “cuarta transformación”?

El punto de partida para el gobierno de AMLO es que todo lo que se hizo de los ochenta para acá está mal. Todo es corrupto, nada sirve y quienes lo condujeron son unos traidores. Los nombres varían, pero la tonada es la misma: el país estaba mejor cuando estaba peor. Un cartel fuera de un restaurante lo resume de manera impecable e implacable: “Estamos peor; pero estamos mejor porque antes estábamos bien, pero era mentira; no como ahora que estamos mal, pero es verdad”.

El gran plan del gobierno es fácil de discernir: concentrar el poder, echar para atrás todas las reformas -hasta lo posible- que se avanzaron a partir de 1982 y, con ello, recrear el nirvana que existía en los setenta para, quizá, que el presidente se pueda reelegir. No es un plan complicado, aunque el manejo político con que se conduce lo aparente. El objetivo es claro y avanza paso a paso. Las tácticas van modificándose, pero el proyecto medular es consecuente.

Lo relevante es que una amplia porción de la población está convencida de que el proyecto vale la pena y que el presidente lo está conduciendo sin conflictos de intereses y sin miramiento. El que la economía vaya de bajada, el consumo se esté estancando (o disminuyendo) y las finanzas públicas puedan experimentar problemas en el futuro mediato a nadie

parece importar. La mayoría de la población está hipnotizada, creyendo que es posible lograr lo que uno quiere sin tener que trabajar o construirlo. El presidente está convencido de que con sólo deseárselo se consumará. Si algo camina mal, todo se resuelve -o ataja- con el ungüento de más transferencias a clientelas y la identificación de culpables en calidad de chivos expiatorios.

Dado que los causantes del desastre que evidencia la pujanza de la clase media (y de un país que, con todos sus defectos, avanzaba) son aquellos que tuvieron alguna participación en la función pública en los últimos treinta años, la cantera de potenciales conservadores, fifis y traidores es literalmente infinita. Si a eso se agregan todas las empresas -y sus empleados- que son cada vez más productivas y exitosas, el potencial para identificar a los causantes de ese desastre nacional del que tan orgullosos estamos tantos (y que es el sustento de la economía), es doblemente infinito.

No cabe ni la menor duda de que el país padece de muchos males y que la suma de un cambio tecnológico incontenible con una economía global (casi) totalmente integrada hace muy difícil resolver todos los problemas de un tajo. Igual de cierto es que la solución no radica -no es posible- en la concentración del poder o la revitalización del cadáver de Pemex, pues el problema se encuentra en el rechazo al futuro que se manifiesta en la incapacidad del gobierno -de este y todos los anteriores desde hace medio siglo- para llevar a cabo una reforma educativa que privilegie el aprendizaje en la era digital sobre el chantaje sindical. El proyecto político es transparente, pero la diferencia entre los sesenta y el presente es que la economía está abierta y eso altera todas las premisas.

Dice un querido amigo que “México jamás será un país civilizado y desarrollado, por lo menos, no en los próximos 100 años” porque en lugar de construir un consenso que permita decisiones con amplio apoyo, “el gobierno privilegia la discordia y la polarización, armas estratégicas en su arsenal de destrucción del presente. Lo que sí seremos en breve -en menos de lo que canta un ganso- es un país menos civilizado, menos desarrollado, más salvaje, más injusto, más polarizado, con más concono y menos desahogado...”. Al día de hoy, más del 70% de la ciudadanía le da a AMLO el beneficio de la duda. La experiencia del último medio siglo es menos generosa: cuando se rompen los equilibrios fiscales, políticos y de la civilización, las crisis no tardan en llegar.
@lrubiof

ÁTICO:

El proyecto gubernamental choca con la estabilidad del país que requiere crecimiento, equilibrio fiscal y concordia.

Comercio internacional de medicinas, la tragedia de países pobres

Mikel Arriola

El intercambio de medicamentos en el mundo, contrario a las reglas del libre comercio, pasa por la autorización local de los productos ante las agencias reguladoras locales, lo que se convierte en un proceso complejo en donde generalmente los países más pobres enfrentan los precios de medicinas más altos.

Lo anterior sucede porque en muchos de los casos la capacidad regulatoria de los países de bajo ingreso es limitada o se utiliza a los reguladores para imponer barreras de entrada no arancelarias, lo que perjudica directamente a los consumidores.

La esperanza de vida de la población se duplicó en el siglo veinte entre otras cosas, gracias a que se incrementó sostenidamente el acceso al agua potable y al drenaje, y muy importantemente a las vacunas y medicamentos producidos industrialmente. Qué mejor ejemplo que los antibióticos que a partir de su comercialización masiva, las infecciones dejaron de ser las principales causas de muerte en los humanos.

Para que la población tuviese acceso a estos productos, previamente los gobiernos de Europa, Estados Unidos y Japón apoyaron procesos costosos de innovación farmacéutica, al mismo tiempo que construyeron reguladores que pudieran asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los productos nuevos.

Históricamente las innovaciones farmacéuticas han estado asociadas a cuantiosas inversiones generando medicamentos con gran capacidad curativa que, por ejemplo, hoy permiten curar la hepatitis C. Para que esto pase la industria innovadora invierte alrededor de 75 billones de dólares al año en investigación y desarrollo de productos. Sin embargo, los frutos de este gran despliegue de inventiva, en la mayoría de los casos, solamente son aprovechados por poblaciones de países desarrollados y de algunos emergentes como México, pero en los países pobres estos productos son inalcanzables. Cualquiera diría que son inalcanzables por los precios a los que se comercializan, sin embargo estos precios reflejan la sobre regulación y la burocracia de las agencias reguladoras locales.

La evidencia es clara: en 2017 los precios de las medicinas en los países de Centroamérica duplicaron a los de México por dos razones fundamentales, I) la falta de capacidad de los reguladores locales para garantizar la bioequivalencia de los genéricos y, II) los prolongados tiempos de autorización de las medicinas nuevas.

Mientras un mexicano con un PIB per cápita de 8,910 dólares al año puede acceder gratuitamente al tratamiento que cura la hepatitis C en el IMSS, un guatemalteco con un PIB per cápita de 4,471 dólares al año estaría obligado a comprar ese tratamiento en Estados Unidos en aproximadamente 100 mil dólares, derivado de que el Ministerio de Salud en su país sigue analizando el medicamento y se tardará algunos años más en aprobarlo, lo

Qué mejor ejemplo que los antibióticos que a partir de su comercialización masiva, las infecciones dejaron de ser las principales causas de muerte en los humanos.

que en otras palabras convierte a esa medicina en inalcanzable.

Por otro lado en países de África donde los reguladores locales no pueden garantizar que los genéricos sean bioequivalentes (es decir, iguales a los de patente), someten a la población al riesgo de consumir productos del mercado negro, o las propias autoridades sanitarias advirtiendo que requieren revisar la seguridad de los productos retrasan por años la autorización, por ejemplo de vacunas que ya fueron revisadas por la Agencia Europea de Medicamentos.

¿Cómo resolver estas asimetrías en salud? La intuición diría que hay que invertir grandes sumas de dinero para que todos los países, desarrollados o no, tuvieran una Food and Drugs Administration (FDA) como en Estados Unidos, con miles de científicos analizando medicamentos y vacunas.

Lo anterior es innecesario y económicamente inviable, lo que no significa que sea imposible resolver el problema. La solución consiste en confiar en el trabajo de los reguladores que tienen mayor grado de desarrollo como aquellos que llevan más de cien años aprobando insumos para la salud como los de Estados Unidos, Europa o Japón.

En el continente americano la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reconoce a México, Brasil, Colombia, Cuba y Argentina como países con autoridades reguladoras de referencia, lo que implica que sus estándares son robustos para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y vacunas.

México en 2012 decidió confiar en el trabajo de la FDA al aprobar los medicamentos autorizados por ella en 60 días en vez de tardarse 5 años como en el pasado. A partir de esa decisión México ha aprobado más de 350 medicinas nuevas relacionadas a las principales causas de mortalidad reduciendo en promedio en 55% su precio respecto de aquel de sus países de origen.

Justamente ahí está la solución para los países que hoy enfrentan altos precios y baja calidad, su ruta de solución es confiar en el trabajo de otros reguladores como Europa y Estados Unidos o como las autoridades regionales reconocidas por la OPS, y ajustar sus procesos de autorización para reducir los tiempos lo más posible como lo hizo México, sólo así podrán reducir aceleradamente los precios y generar un beneficio directo al consumidor que es el objeto central de la regulación.